



El jefe de seguridad de la empresa de construcción de la presa, DESA, es una de las siete personas detenidas por el asesinato de Berta Cáceres. © Giles Clarke/Global Witness

ESTUDIO DE CASO 2: EL ASESINATO DE BERTA CÁCERES Y LOS OSCUROS INTERESES QUE MUEVEN LA PRESA DE AGUA ZARCA

Berta Cáceres, madre de cuatro hijos y una de las activistas de derechos ambientales e indígenas más destacadas de Honduras fue asesinada en su casa en marzo de 2016. Cáceres llevaba años haciendo campaña en contra de la construcción por parte de una empresa hondureña, Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) de una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad y el río sagrado Gualcarque. No fue la primera vez que habían atentado contra su vida: Cáceres había presentado ante la policía decenas de denuncias sobre amenazas de muerte y había denunciado otros incidentes violentos e intimidaciones. Ninguno de estos actos ha sido investigado. Y, a pesar de su creciente reputación internacional, o quizás precisamente por ella, alguien estaba decidido a silenciarla.

El asesinato de Cáceres ocupó los titulares internacionales por su prominencia como activista y

como dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) pero el suyo fue solo uno de toda una serie de asesinatos relacionados con la presa de Agua Zarca, que se remontan a varios años atrás. El 15 de julio de 2013, Tomás García, miembro del COPINH, y su hijo de 17 años recibieron disparos efectuados a corta distancia por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica en el lugar donde se encuentra la presa en Río Blanco⁵³. Tomás García murió al instante a causa de sus heridas, pero su hijo, Alan, sobrevivió, a pesar de haber recibido varios disparos en el pecho, la espalda y un brazo⁵⁴.

Un año más tarde, asesinaron también a William Jacobo Rodríguez, miembro del COPINH y activista en contra de la presa⁵⁵. Después, se acusó a los policías que protegían el proyecto hidroeléctrico de tortura y amenazas de muerte contra otros miembros del COPINH⁵⁶. En octubre de 2014, desapareció el hermano de Rodríguez, un joven de 15 años que se dedicaba a cultivar maíz en la tierra ancestral lenca que quería la empresa del proyecto; su cuerpo apareció más tarde en un río con indicios de tortura⁵⁷. El 5 de junio de 2014, ocho personas tendieron una emboscada a María Santos Domínguez, miembro del COPINH, y la amenazaron con asesinarla por su oposición a la presa, además de cortarle un dedo con un machete⁵⁸.

Días después del asesinato de Cáceres, unos atacantes no identificados dispararon en plena cara a uno de sus compañeros, Nelson García, y lo mataron cuando volvía a casa tras el desalojo de una comunidad lenca por parte

de las fuerzas de seguridad de Honduras⁵⁹. El asesinato ocurrió en Río Lindo, unas 100 millas (unos 160 km) al norte de donde asesinaron a Cáceres⁶⁰. Unos meses más tarde, en julio de 2016, se encontró en una escombrera el cuerpo de otra activista más del COPINH, Lesbia Janeth Urquía; tenía heridas de machete en la cabeza⁶¹.

IMPLICACIÓN DEL EJÉRCITO

Siete hombres han sido acusados del asesinato de Berta Cáceres: dos de ellos tienen relación con DESA, la empresa propietaria de la presa de Agua Zarca, mientras que cuatro de ellos tienen vínculos con el ejército hondureño⁶². Sergio Ramón Rodríguez era un ingeniero ambiental empleado por DESA y Douglas Geovanny Bustillo era el antiguo jefe de seguridad de la empresa, además de exteniente del ejército y especialista en inteligencia militar. Edison Duarte y Henry Javier Hernández Rodríguez eran oficiales militares retirados y el Mayor Mariano Díaz era veterano de las fuerzas especiales y formador de la policía militar⁶³. Bustillo está acusado de contratar a Edison y a su hermano Emerson como sicarios⁶⁴.

Sin embargo, la relación entre el ejército hondureño y el asesinato de Cáceres no acaba ahí. Un exmiembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos, a quien entrevistó el periódico *The Guardian*, afirma que el nombre de Cáceres apareció en una lista negra militar meses antes de su muerte⁶⁵. Esta persona dijo al periódico que a dos unidades de élite se les entregó una lista que incluía los nombres y fotografías de decenas de activistas sociales y ambientales, con órdenes de eliminar a todos esos objetivos⁶⁶. El líder del COPINH Tomás Gómez informó a Global Witness de que se había vendido a sicarios una lista negra similar, en la que se ofrecían 1.000 USD por el asesinato de Berta⁶⁷. En septiembre de 2016, el COPINH descubrió que un espía militar se había infiltrado en la organización y, durante un año, había estado pasando información sobre sus actividades directamente a la Presidencia⁶⁸.

La relación de DESA con el ejército hondureño alcanza hasta los niveles más altos. Según documentación de la empresa que ha podido consultar Global Witness, el presidente de DESA es Roberto David Castillo Mejía, exagente de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal de Honduras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica⁶⁹. En 2009, una auditoría pública descubrió pruebas de que Castillo había participado en actos de corrupción: aún recibía un sueldo de las Fuerzas Armadas tras haber abandonado la institución y una empresa de su propiedad vendía al ejército productos sobrevalorados⁷⁰. Pocos meses antes de su muerte, Cáceres comentó a Global Witness que

Castillo la había llamado para intentar sobornarla para que dejara de oponerse al proyecto de Agua Zarca⁷¹.



Berta Cáceres fue uno de los 123 defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en Honduras desde 2010. © The Goldman Prize

LA FAMILIA ATALA Y LA RED DE CONEXIONES POLÍTICAS DE DESA

La documentación de DESA muestra que su junta comprende a algunas de las élites empresariales y políticas con mejores conexiones de Honduras. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, es exministro de gobernación y justicia del Gobierno de Honduras⁷². El vicepresidente de DESA, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es el presidente del banco BAC Honduras y miembro de una de las familias empresariales más adineradas de Honduras, los Atala⁷³.

El primo de Jacobo es el multimillonario Camilo Atala, exministro de Gobierno y propietario del banco Ficohsa⁷⁴. Camilo Atala también es uno de los principales inversores del polémico Indura Beach and Golf Resort, del que hablamos en el estudio de caso 5. El hermano de Jacobo, José Eduardo Atala Zablah, también está en la junta de DESA⁷⁵ y es el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana y exdirector por Honduras del banco regional Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)⁷⁶. El BCIE es uno de los principales inversores del proyecto de DESA de construcción de la presa de Agua Zarca⁷⁷. Otro miembro de la familia Atala, Daniel Atala Midence, es director financiero de DESA⁷⁸.

LOS INVERSORES INTERNACIONALES

El proyecto de Agua Zarca es un buen ejemplo de cómo en la corrupción y los abusos de derechos humanos que están produciéndose en Honduras hay implicados inversores internacionales y bancos de desarrollo. El banco holandés de desarrollo FMO, junto con el

* Este informe originalmente reportó que Ficohsa y Camilo Atala Faraj fueron 'actualmente bajo investigación por blanqueo de dinero'. De hecho, las acusaciones de blanqueo de dinero fueron sujeto a un 'auto de sobreseimiento provisional' en julio del 2016. Hemos también recibido una petición para que subrayáramos que ni el banco ni la familia Atala Faraj han tenido jamás un involucramiento en el proyecto DESA.



El líder del COPINH Tomás Gómez visita la tumba de Tomas García, asesinado a tiros por el ejército durante una protesta contra la presa de Agua Zarca. © Giles Clarke/Global Witness

organismo Finnfund del Gobierno finlandés y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) están financiando la construcción de DESA de la presa de Agua Zarca⁷⁹. El FMO es el principal inversor internacional y ha aportado 15 millones de dólares estadounidenses (USD)⁸⁰ del coste total de 64 millones del proyecto⁸¹. Tras el asesinato de Berta Cáceres, la financiación de la presa se suspendió y el FMO y Finnfun anunciaron que estaban «intentando abandonar el proyecto»⁸². A pesar del

Actas judiciales muestran que la empresa de construcción de la presa, DESA, exigió la persecución, el castigo y la neutralización del COPINH.

carácter público de la oposición de Cáceres a la presa y las resultantes amenazas contra ella y el COPINH, Cáceres comentó a Global Witness en noviembre de 2015 que el FMO nunca había intentado ponerse en contacto con ella o con sus compañeros⁸³.

¿HASTA LO MÁS ALTO?

La historia de Cáceres es un ejemplo que ilustra claramente cómo los intereses políticos pueden apropiarse del sistema judicial hondureño. Según las actas judiciales obtenidas por Global Witness, el Gobierno hondureño y DESA intentaron representar a Cáceres y sus compañeros como extremistas violentos que buscaban «el derrumbamiento del Gobierno y la industria privada»⁸⁴. En 2014, presentaron una demanda contra Cáceres y otros dos miembros del COPINH por «usurpación, coacción y daños continuados» contra el proyecto de construcción de la presa y por

La amenaza de los imputados BERTHA ISABEL CACERES FLORES, TOMAS GOMEZ MENBREÑO Y AURELINO MOLINA VILLANUEVA que lideran COPINH es destruir a mi representada DESA a través de atentados perpetrados sabotaje y manipulación de las masas, es una realidad que obliga al Estado Hondureño a actuar con todos los recursos a su alcance para perseguir, sancionar, neutralizar y disuadir aquellas conductas individuales y de grupos que pretenden enervar la autoridad, infundir terror, destruir vidas humanas y bienes materiales, públicos o privados, atentando contra la propia independencia y soberanía nacional.



Alan García sobrevivió a los disparos efectuados a corta distancia por el ejército hondureño durante una protesta contra la presa de Agua Zarca. © Giles Clarke/Global Witness

intentar debilitar el orden democrático⁸⁵. Las actas judiciales muestran que los abogados de DESA llegaron incluso a solicitar al Estado hondureño que «actúe con todos los recursos a su disposición para perseguir, castigar y neutralizar» las acciones del COPINH⁸⁶. Cáceres y sus compañeros fueron absueltos por los tribunales de todo delito⁸⁷.

Global Witness opina que quienes encargaron el asesinato de Berta Cáceres se encuentran en un escalafón superior al de las personas que están detenidas actualmente. En septiembre de 2016, el expediente judicial del asesinato de Berta Cáceres fue robado en un atraco a una magistrada de la Corte Suprema. Este parece un claro intento de intimidación y de enturbiar las aguas de la investigación, la cual, aparte de la enorme influencia política que ejercen DESA y el ejército hondureño, también indica que es muy poco probable que el Gobierno hondureño arreste a los verdaderos autores si, tal como se sospecha, tienen relaciones importantes con el proyecto de construcción de la presa o con el ejército⁸⁸. La familia de Berta ha solicitado en numerosas ocasiones que la CIDH dirija una investigación internacional independiente. A pesar de que la comisión se muestra receptiva a la propuesta, el Gobierno hondureño hasta la fecha se ha negado a aceptarla.

LO QUE HAY QUE HACER

Global Witness exige que se cancele el proyecto de la presa de Agua Zarca y que se lleve a cabo una investigación internacional independiente sobre el asesinato de Berta Cáceres bajo la responsabilidad de la CIDH. La investigación debería centrarse en

la relación que existe entre el ejército hondureño y los propietarios de la presa, DESA. Deben investigarse adecuadamente los asesinatos por encargo de los miembros de la organización de Cáceres, el COPINH, y garantizarse la seguridad de sus activistas, muchos de los cuales se supone que deben gozar de protección de emergencia del Gobierno, tal como solicitó la CIDH. Los inversores internacionales deberían desinvertir inmediatamente en el proyecto y el Gobierno de Honduras debe cancelar la concesión del proyecto dadas las graves violaciones de derechos humanos relacionadas con la presa y el incumplimiento de la consulta a todas las comunidades indígenas afectadas antes de la aprobación del proyecto.

HALLAZGOS PRINCIPALES

Global Witness exige una investigación, en concreto, de lo siguiente:

- Las relaciones de **DESA** con el asesinato de Berta Cáceres, dado que dos de los hombres detenidos actualmente por su asesinato trabajaban para esta empresa.
- Las relaciones del **ejército de Honduras** con el asesinato de Berta Cáceres, dado que tres de los detenidos por su asesinato están relacionados con el ejército hondureño; dado que el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, solía trabajar para la inteligencia militar; y dado que se ha denunciado que el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista negra del ejército.
- El presidente de DESA, **Roberto David Castillo Mejía**, por supuestamente intentar sobornar a la activista indígena Berta Cáceres para frenar sus protestas en contra de la presa Agua Zarca, que es propiedad de DESA.

Cuando Global Witness pidió a DESA que comentara sobre estas acusaciones, la empresa negó cualquier participación en el asesinato de Berta Cáceres o cualquier vínculo entre la empresa y el ejército o poderosos actores empresariales. Esto es a pesar de confirmar en una carta a Global Witness que el secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes, es el ex ministro de Gobernación y Justicia y el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, fue miembro del ejército hondureño. Castillo también negó haber tratado de sobornar a Berta Cáceres.